

Los nuevos rostros de la crisis. El caso del Ecuador

José A. Moncada Sánchez*

El desarrollo de la crisis

Han pasado cuatro años desde que en la ciudad de Cuenca (Ecuador), en noviembre de 1986, se celebró el V Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social del Ecuador, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca (IDIS), con el auspicio de importantes organismos e instituciones científicas nacionales y extranjeras. Cuatro años desde que nos reunimos aquí alrededor de 400 intelectuales en una espléndida jornada académica y de reflexión para examinar fundamentalmente el tema central "Historia, Sociedad y Crisis en el Ecuador" a través de ponencias, mesas redondas, conferencias y otros eventos culturales y científicos.

Recordemos que 1986 constituyó un año muy difícil para el país, caracterizado por un comportamiento económico que, aunque de signo positivo, del orden del 3.1 % anual de su producción nacional, lucía profundamente irregular y vacilante; acompañado de una inflación del 23 % pero que, desde entonces, empezó a cobrar un significativo impulso hasta ubicarse en cifras muy cercanas al 90 % hacia finales de 1988. Sin duda, situaciones como las

* Ex-Rector de la Universidad del Ecuador.

anotadas, a las que corresponde sumar el desempleo y subempleo en aumento, la virtual impagabilidad de la deuda externa y los desequilibrios monetarios y financieros se agravaron, como consecuencia, entre otras, del paquete de medidas económicas dictadas el 11 de agosto de 1986, que incluyó la desincautación de divisas —excepto las provenientes de las exportaciones de petróleo— y la “flotación” de la tasa de interés, bajo el declarado propósito de mejorar la capacidad competitiva de las exportaciones y aumentar el ahorro interno.

Recuerdo que, en la sesión inaugural del V Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social, en una intervención que se me invitó a pronunciar, dije que, mediante medidas como las dictadas en agosto de 1986, “el gobierno hizo nuevas concesiones a la burguesía . . . que con ellas se iban a reforzar las tendencias inflacionarias, se iba a deteriorar más aún la reserva monetaria, . . . iban a persistir los desequilibrios de balanza de pagos y acentuarse la depreciación del sucre . . . así como arruinarse empresas no monopolísticas de la industria, la agricultura, el comercio”.

Hoy, después de cuatro años se puede constatar, con tristeza, el acierto de aquellas previsiones. En 1987, la economía ecuatoriana, en términos de producto interno bruto, (PIB), cayó en un 5.2%, siendo ésta la segunda caída que se producía en lo que iba de transcurrida la década de los ochenta. Desde 1986 hasta nuestros días se ha producido la liquidación de algunos bancos y compañías financieras que se encontraban en virtual estado de suspensión de pagos, así como ha persistido un constante deterioro de los salarios e ingresos de amplias capas de la población nacional.

Hoy, podemos asegurar, la vida es más difícil para la mayoría de los ecuatorianos que tienen que destinar más de sus ingresos a gastos en alimentación, vivienda, vestuario y salud. Muchos trabajadores viven bajo la incertidumbre de perder sus cargos o sus prestaciones y antigüedad y grandes contingentes de campesinos siguen emigrando a las ciudades y hasta a otros países, conforme lo destacan noticias nacionales e internacionales.

A decir del Banco Central del Ecuador (*Boletín de Cuentas Nacionales*, No. 12, mayo 1989), 1988 fue un año de una recuperación inusual, pues el PIB habría crecido al 12.8%, lo cual situaría a la economía ecuatoriana en una etapa de expansión superior al

crecimiento de las economías más dinámicas del mundo, hecho que contrasta con el notable aumento de la desocupación, la carencia de recursos, la inflación y la ausencia de inversiones. No tenemos elementos para asegurar que ha existido o no manipulación de las cifras. De haber esto sucedido, no habrá sido la primera y probablemente no será la última vez que tal hecho acontezca. El propio presidente Borja, admitió tal posibilidad, cuando en su mensaje del primer año de gobierno criticó a “ciertos fanáticos que hacen malabares con las cifras”; por lo mismo, lo único que nos corresponde es manifestar nuestras serias dudas sobre el real crecimiento de la economía nacional en 1988; mas, si se persistiera en sostenerlo y si verdaderamente hubiera ocurrido en la práctica ¡enhorabuena!

Manteniendo tales dudas y ante la perspectiva de no tener estadísticas alternativas que ofrecer, no nos queda otra cosa que admitir que la crisis que embarga al Ecuador es de tal gravedad y complejidad que ya ni una recuperación tan elevada como la experimentada por el país durante 1988, sirve para al menos atenuar los problemas de la inflación y del desempleo. En otras palabras, ya ni siquiera la recuperación económica es garantía mínima de que gracias a ella se puedan afectar a tan serios problemas como la inflación, el desempleo ni el oneroso pago de la deuda externa que, al parecer, se han convertido en desequilibrios de mayor alcance, incluso independientes de la forma como se desenvuelve el ciclo económico.

Lo que alimenta, también, el carácter escasamente confiable de las cifras referidas al comportamiento de la economía ecuatoriana durante 1988, es el virtual estancamiento y hasta la eventual caída de la producción nacional, que los organismos gubernamentales preveen para 1989. Después de tan alta expansión económica del país, durante el año anterior, hasta se puede admitir una leve disminución o hasta una sensible reducción en el siguiente año, pero no al extremo de las cifras que se ofrecen; así, de acuerdo a previsiones realizadas por voceros oficiales se reconoce que, hacia fines de este año, el crecimiento del producto será inferior al uno por ciento.

¿Cómo es posible que después de tan alto crecimiento ocurra una caída tan espectacular en pocos meses de manejo económico cuyo mayor éxito, a decir de los principales voceros gubernamentales, ha sido precisamente el de domesticar la inflación y contro-

lar la crisis? De todo lo cual se desprende que lo que caracterizaría ahora a la crisis, por lo tanto, es un comportamiento tan violentamente inestable que llena de total incertidumbre cualquier previsión que se realice sobre su probable futura evolución.

Pero aún así, previsiones gubernamentales sostienen que la situación para 1989 y hasta 1992 no luce tampoco favorable. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el PIB podría expandirse a tasas anuales entre el 0.75 y el 3.15% por año; la inflación anual, entre el 47.1 y el 55.4%, el desempleo, al fluctuar entre el 15.6 y el 12.8% de la fuerza de trabajo, significaría mantener al año terminal del Plan, entre 480 mil y 680 mil desocupados.

A pesar de tan pobres proyecciones y bajo el supuesto de que se cumpla al pie de la letra lo que se sostiene en el Plan, entre 1989-1992, el país tendría que contratar más de 5 100 millones de dólares de nuevos préstamos y promover la radicación de 320 millones de dólares de inversiones extranjeras en nuestro territorio, hechos que nos exigiría cancelar, por concepto de intereses de los préstamos y de utilidades de las inversiones, más de 5 800 millones de dólares. Al margen de que las cifras señaladas crean situaciones de dependencia que se traducen en mayores deudas que resultan muy difíciles de pagar a su vencimiento, es evidente que la sola posibilidad de cumplir tales metas va a exigir el ejercicio de una acción estatal claramente favorable a los grupos de poder, hecho que va a agudizar la actual inequitativa distribución del ingreso y que, hasta puede conspirar contra la preservación y fortalecimiento de los valores democráticos y la afirmación de la soberanía de nuestro pueblo.

Recuperación que tarda en llegar. Nuevos rasgos de la crisis

Pero a pesar de estos hechos, diversas opiniones se empeñan en reconocer y declarar que la situación futura se presenta más bien optimista y que la economía nacional se encuentra en las puertas de una próxima recuperación. Así lo sostuvo el presidente Borja en su informe del primer año de gobierno de la Izquierda Democrática-Democracia Popular. Así lo sostuvieron también, en rueda de prensa conjunta el lunes 14 de agosto de 1989, el presidente de la Junta Monetaria, Abelardo Pachano; el Ministro de Finan-

zas, Jorge Gallardo; y, el Gerente General del Banco Central, José Morillo; quienes reconocieron que "luego de la etapa de estabilización se deberá entrar a una segunda etapa denominada de crecimiento con estabilidad, en la que se espera que el PIB crezca en 1989 al 1% y en 1990 en 3.5% (más que lo propuesto por el Plan de Desarrollo);¹ es decir, se iniciará un proceso de reactivación con una expansión económica superior a la tasa de crecimiento de la población para recuperar el ingreso *per cápita*" (*El Comercio*, martes 15 de agosto de 1989).

Naturalmente que los mensajes de optimismo (o de pesimismo) son expresiones temperamentales, anímicas y no de la razón. Adicionalmente, que el Presidente de la República y los responsables de la ejecución del programa de ajuste económico, manifiesten opiniones optimistas es explicable aún por razones de salud mental; pero ello no significa que la crisis haya sido o será resuelta ni siquiera controlada debidamente.

Cierto que, comparada con la situación de hace 3 o 4 años, hoy se puede constatar una disminución de los desequilibrios externo y fiscal. En el primer caso, porque desde 1987 mantenemos una situación de insolvencia crediticia frente al sistema financiero internacional y porque como consecuencia de la severidad de la crisis, se contrajeron sensiblemente las importaciones; en el segundo caso, debido básicamente a la contención de los gastos estatales y la fuerte elevación de los precios y tarifas del sector público. La aplicación del programa de ajuste le ha permitido al gobierno reducir ciertos desequilibrios. La política contraccionista y el sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han convertido en la clave de la renegociación de la deuda externa.

Así pues, lo que ocurre es que la crisis ha entrado en un nuevo periodo donde adquiere nuevos rasgos y modalidades. Hace cuatro años, cuando se celebraba en esta ciudad el V Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social, las principales manifestaciones de la crisis eran los desajustes financieros, las devaluaciones bruscas, la incapacidad para pagar la deuda, la sobrefacturación, la subfacturación, las fugas de capitales, el déficit de presupuesto. De tal situación se ha pasado a otra donde los problemas anteriores, sin haber desaparecido, son menores y han emer-

¹ El cursivo es mío.

gido otros como la profunda depresión económica, las caídas de la producción, de la inversión, del empleo y de los salarios reales; de donde se desprende que el optimismo gubernamental es puramente ideológico y temperamental.

La estrategia fondomonetarista. Hechos y posibilidades

Mediante la Carta de Intención que el gobierno presentó al FMI, el 7 de agosto de 1989, como requisito para obtener de este organismo un crédito *stand-by* de 137 millones de dólares, se establecen como compromiso del gobierno, entre otros:

1. Reducir la inflación anual al 50% en el mes de diciembre de 1989 y al 25% en 1990;
2. Reducir el déficit de la cuenta corriente del 7% del PIB en 1988, al 5.7% en 1989; al 5% en 1990 y reforzar la posición de reserva monetaria internacional en 100 millones de dólares.
3. Reducir el nivel de egresos corrientes (incluyendo intereses devengados) de un 20.3% en 1988 a un 17.8% en 1989 y, el déficit del sector público consolidado del 5.1% en 1988, al 3.4% del PIB en 1989 y al 2.25% en 1990;
4. Avanzar en el desmantelamiento gradual de las restricciones al comercio exterior e impulsar más la integración de la economía ecuatoriana a la economía mundial, mediante la expansión de las exportaciones y la reducción de las restricciones cambiarias y comerciales vigentes;
5. Incrementar la rentabilidad de los activos financieros domésticos, persistir en una política de empleo y de salarios prudente en el sector público, así como financiar cualquier reajuste salarial adicional mediante nuevos ingresos (?) o con nuevas reducciones de gastos;
6. Lograr que el país no tenga, hasta fines de 1989, atrasos externos de otra naturaleza que no sea su deuda con la banca privada internacional, con quien además mantendrá un programa activo de negociación.

En términos simples, los anteriores "compromisos" gubernamentales frente al FMI, implican e implicarán en adelante:

- a. Continuar con la política de elevación del precio de los combustibles, los impuestos prediales, las tarifas de luz, agua, teléfonos, alcantarillado;
- b. Persistir y eventualmente acelerar las minidevaluaciones semanales sucesivas actualmente vigentes;
- c. Elevar las tasas de interés a fin de "incrementar la rentabilidad de los activos financieros";
- d. Reajustar sueldos y salarios a niveles inferiores al incremento de los precios y financiar tales reajustes mediante el establecimiento de nuevos impuestos;
- e. Liberar las importaciones, limitar la protección a las empresas nativas y estimular la producción para la exportación, aún a costa de la producción para consumo doméstico y el desmantelamiento de los regímenes acordados a nivel del ALADI y Grupo Andino;
- f. Reducir los gastos gubernamentales, especialmente los de naturaleza social;
- g. Pagar intereses del total de la deuda externa y las amortizaciones de la deuda con gobiernos y organismos multilaterales de crédito.

¿Qué posibilidades reales existen de ejecutar todas estas medidas? La respuesta no puede ser terminante pues todo dependerá de la resistencia que los trabajadores y grupos organizados de la sociedad nacional ejerzan frente a los diferentes actos del gobierno. Lo que sí está claro es que la ejecución de medidas como las anotadas, tiene límites no sólo políticos sino económicos; así, la continuación de la recesión, la desigual distribución del ingreso y el deterioro de los salarios reales, harán improbable el establecimiento de nuevos tributos. Y no se trata de unos pocos y aislados tributos sino del establecimiento de una presión tributaria significativa, pues no cabe olvidar que el déficit especialmente del sector público no financiero (CEPE, INECEL, IETEL, IESE, Consejos Provinciales, Municipales, Universidades) fue en 1988 equivalente al 40% del total de ingresos del presupuesto general del Estado.

En cuanto al pago de la deuda externa, la renegociación "activa" de ella ha permitido sin duda aliviar un tanto los problemas; sin embargo, el alivio es sobre todo temporal; pues, cuando se reanuden los pagos de amortizaciones, la cantidad de recursos que habrá que enviar al exterior será sin duda apreciable y dejará un

margen muy estrecho para importar equipos, materias primas y aún bienes de consumo que hagan posible el inicio de la reactivación.

No obstante las renegociaciones de la deuda externa realizadas desde el gobierno de Osvaldo Hurtado y la suspensión de su servicio en el gobierno de Febres Cordero, la deuda ha seguido creciendo, considerando los créditos últimamente otorgados al país por el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, el gobierno de Japón. Sumando a todos ellos el préstamo atado concedido por España al Ecuador, a raíz del viaje del presidente Borja a Madrid y, el crédito otorgado por el FMI, con motivo de la aprobación de la Carta de Intención, la deuda externa habría crecido en alrededor de 650 millones de dólares, esto es, a un promedio cercano a los dos millones de dólares diarios, durante el tiempo que, hasta octubre de 1989, lleva la administración socialdemócrata.

Pero el país requiere divisas no sólo para pagar la deuda sino para cancelar el uso de tecnología foránea, para compensar los efectos de la relación desfavorable de los precios de intercambio, para reemitir utilidades de las filiales de transnacionales que operan en el país, para financiar la fuga de capitales. Todos estos hechos representan una inmensa sangría para el país. Por lo tanto, el problema de la deuda y, en general, el problema de la evasión de recursos hacia el exterior persiste, no se lo ha superado ni se lo está tampoco superando, más bien, su persistencia significa restar la utilización de grandes masas de recursos en inversiones productivas y generadoras de empleo e ingresos para buena parte de la población nacional.

En el análisis anterior, no se ha considerado la posibilidad de que, en los próximos meses, se produzca una reanudación de la tendencia alcista de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales (aspecto nada improbable dado el alto déficit presupuestario estadounidense) y tampoco se ha considerado que el sistema de las minidevaluaciones y su eventual aceleración elevará también, en el orden interno, el costo de la deuda externa.

En cuanto al aumento de las exportaciones y la consiguiente reducción del desequilibrio externo, su posibilidad luce aún más incierta. En 1988 y 1989 se produjo una baja de los precios de los principales productos de exportación del Ecuador; se puso de manifiesto también una saturación del mercado petrolero, después de

un efímero repunte de sus precios y, en general, la incertidumbre que rodea el comercio exterior ecuatoriano hace improbable confiar en él como elemento de estímulo a la reactivación de la economía nacional, máxime cuando las prácticas proteccionistas y los déficit comerciales de países como Estados Unidos y Francia realimentan los desequilibrios externos de países como el nuestro. Al fin y al cabo, la crisis de un país como el Ecuador, se amalgama con la crisis general del capitalismo a nivel internacional, son fenómenos que difícilmente pueden comprenderse si se prescinde de examinar las contradicciones fundamentales a las que se enfrenta el mundo capitalista, la tendencia histórica hacia su persistencia y desigual descomposición.

La posibilidad de reducir la inflación a una meta del 50% para fines de 1989 y al 25% a fines de 1990, luce bastante improbable, tanto porque simultáneamente se están elevando los precios de los combustibles, las tarifas de transporte y de otros servicios públicos, como porque tampoco está eliminada la posibilidad de una macrodevaluación. Además, los precios de bienes como cemento, hierro, aceites, leche, harinas, arroz, útiles escolares, gaseosas, siguen subiendo y ello repercutirá significativamente en el índice general.

Durante la tercera semana de septiembre de 1989, la Junta Monetaria devaluó la moneda, al elevar la cotización del dólar de intervención de 554 a 560 sucres, por sobre las minidevaluaciones semanales sucesivas, y redujo el diferencial cambiario en 1%, con lo cual nuevamente se beneficia a los exportadores y se persigue estimular a los importadores, hecho que ha sido la tónica esencial de la política económica del gobierno. Naturalmente, estas medidas realimentan el proceso inflacionario que vive el país. El 20 de octubre, esto es, al mes de haberse adoptado las anteriores medidas, la Junta Monetaria nuevamente devaluó el sucre, al elevar la cotización del dólar a 590, redujo el diferencial cambiario en un punto adicional, hasta situarlo en 3%; disminuyó en 25% los depósitos previos a las importaciones y dictó otras medidas en el campo fiscal. No queda duda: el gobierno se mueve en la más linajuda estrategia fondomonetarista, antipopular y burguesa para tratar de conjurar la crisis que padece el Ecuador.

Admitiendo que en los tres últimos meses de 1989, el país exporte un promedio mensual de 100 millones de dólares de productos diferentes al petróleo, y que no se produzca ninguna otra

macrodevaluación, la medida dictada por la Junta Monetaria el viernes 20 de octubre —devaluar la moneda nacional en algo más del 3%, al pasar el precio del dólar de 572 a 590 sucres— significará trasladar a las arcas de un puñado de grandes exportadores, la suma de 5 400 millones de sucres, sin considerar en esta suma los beneficios adicionales que tal puñado de grandes exportadores recibirán gracias a la continuación de las minidevaluaciones semanales sucesivas y la devaluación realizada en septiembre último.

Naturalmente, el pequeño grupo de grandes exportadores no es solamente tal. Estos forman parte de poderosos consorcios que a su vez, actúan en el sector industrial, financiero, de los servicios, el comercio interno, las actividades de urbanización, los medios de difusión; por lo tanto, al percibir recursos en las magnitudes citadas, se incrementa el poder económico de tales consorcios o grupos, se amplía su disponibilidad de recursos, se agranda su liquidez y, el gobierno, atento a tales hechos, les abre posibilidades de inversión, emitiendo títulos públicos para que sean adquiridos por ellos. Es lo que sucedió el mismo viernes 20 de octubre, cuando la Junta Monetaria dispuso la emisión tanto de bonos del Estado por tres mil millones de sucres “para capitalizar al Banco Nacional de Fomento”, como de bonos de estabilización en moneda extranjera “para cancelar cobranzas pendientes por importaciones realizadas en años anteriores”.

Con estas medidas, es evidente que subirán más las tasas de interés, seguirán escaseando los dólares y por consiguiente subiendo el tipo de cambio, a la vez que afirmándose las tendencias especulativas y realimentándose las transferencias de fondos desde el Estado y los sectores productivos hacia especuladores, saca dólares y rentistas.

En el orden político, es seguro que con las medidas adoptadas, se fortalece a los grupos monopolistas conformados por poderosos inversionistas nativos y trasnacionales vinculados a los partidos políticos centro-derechistas, abortando así toda tentativa de iniciar el declarado proceso de redistribución del ingreso para, más bien, castigar a los trabajadores y debilitar a sus organizaciones de masas. A la luz de estas consideraciones, se puede ahora entender la declaración de un legislador del partido Democracia Popular quien sostuvo hace pocos días que en el país “. . . hay una eficiente y dinámica política monetaria y financiera (gubernamental)” y, simultáneamente, se puede también comprender la declaración del señor

Pedro Kohn, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha quien, recogiendo los planteamientos formulados por los sectores empresariales del país en general, sostuvo que la medidas adoptadas el viernes 20 de octubre por la Junta Monetaria, “apun- tan en la dirección correcta pero son aún insuficientes. . .”.

Con la política de corte monetarista que sigue el gobierno, no se va a vencer a la inflación. Eventualmente, se puede inclusive atenuarla pero a costa de un elevado desempleo, conforme ya ha quedado demostrado en nuestro país y en otros de esta parte del mundo. Es que la inflación ha dejado de ser un fenómeno puramente económico y menos aún exclusivamente monetario que pueda ser superado mediante la contención del gasto o de la oferta monetaria y de crédito.

Así pues, las perspectivas de una recuperación de la economía nacional son todavía bastante inciertas. Lo que persigue el gobierno es reducir el ritmo de expansión del gasto y aumentar los ingresos públicos mediante mejores recaudaciones, el establecimiento de nuevos impuestos y de precios más elevados de los bienes y servicios que vende el Estado. Busca también renegociar la deuda externa; atraer nuevas inversiones extranjeras y préstamos, alcanzar un crecimiento muy bajo de la oferta monetaria y reajustar sueldos y salarios a un ritmo inferior al crecimiento de los precios y de la productividad, a fin de elevar la tasa de ganancia y reanimar la inversión. Se trata, en suma, de una estrategia que persigue continuar descargando sobre las espaldas de los trabajadores el costo de la crisis que, bajo distintos rasgos y modalidades, sigue castigando al país.

Pero finalmente y por sobre toda acción que ejecute o no el gobierno, la recuperación vendrá toda vez que la crisis es recurrente y la reproducción capitalista se desenvuelve cíclicamente, recorriendo fases. Pero lo que queremos subrayar es que la recuperación que sobrevenga ya no tendrá, como en la década de los setenta por ejemplo, una duración y vigor que nos hagan creer que los problemas actuales, los crónicos o estructurales y los coyunturales o cíclicos, podrán ser resueltos y que, consiguientemente, las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población nacional podrán mejorar significativamente.

La ofensiva de la burguesía en el terreno ideológico

Naturalmente que una cosa es la reactivación económica y otra es la solución a los graves problemas especialmente estructurales que soporta el país.

La solución de problemas tan graves como la baja esperanza de vida de los ecuatorianos, la alta mortalidad infantil, la inequitativa distribución del ingreso, el bajo promedio general de instrucción, la desnutrición, el desarrollo regional y provincial desigual, el abultado desempleo y subempleo no se resuelven a través de la sola reactivación económica. Inclusive pretender solucionar los desequilibrios de balanza de pagos, la inflación, el oneroso servicio de la deuda externa, no parece ser posible en el marco del capitalismo y bajo el dominio de la burguesía y el capital trasnacional en asociación con el Estado, cada vez más comprometido, con el proceso de acumulación. De ahí que, frente a la escasa o débil capacidad de la política económica que se anticipa para incidir sobre los principales problemas de la sociedad nacional, es factible prever el ejercicio, por parte de la burguesía nacional y extranjera, de una intensa campaña ideológica.

Así, en el empeño por mantener el presente estado de cosas, en el afán por reproducir las actuales relaciones sociales de producción y conservar la tranquilidad social y la estabilidad política, en el propósito de preservar al capitalismo como formación social, los sectores dominantes ecuatorianos, a través del Estado, harán todo lo posible por evitar una agudización de las contradicciones esenciales; por crear expectativas e ilusiones de que dentro del capitalismo se superarán gradualmente las dificultades; por cerrar el paso a las ideas socialistas mediante el ocultamiento del carácter de clase burgués del Estado, la deformación de la realidad, la atención parcial a una serie de demandas de los sectores populares, la difusión de un antimperialismo declarativo y demagógico, la despolitización de los trabajadores, la coerción, el encauzamiento del movimiento popular, el refinamiento de los mecanismos de control y de represión, el reavivamiento de los procesos electorales, el montaje de campañas de desprestigio de los regímenes socialistas.

Hoy mismo estamos observando como, frente especialmente a la crisis actual y al compromiso del gobierno con el FMI de contener el gasto estatal y reducir el déficit del presupuesto —que es mayor en el caso del sector público no financiero— no se vacila

en propiciar la privatización de algunas empresas y organismos estatales, en atacar la sindicalización de los empleados y trabajadores del sector público, en reorganizar la seguridad social. En otros casos, paradójicamente, se pugna por la estatización de ciertas actividades a fin de asegurar una corriente de recursos en beneficio de los grandes inversionistas y ¡construir un sistema de economía mixta!

El martes 1 de agosto de 1989, 28 dirigentes empresariales ecuatorianos en un remitido titulado “Exposición de los Sectores Productivos y Financieros del País”, criticaron duramente la conducción del país durante el primer año de gobierno del doctor Rodrigo Borja. En el comunicado acusan al gobierno de ser el causante de incertidumbre, depresión, falta de coherencia en el manejo laboral y social, invasiones de tierra, inseguridad pública. El hecho de que entre los firmantes del comunicado, figuren personas que anteriormente habían expresado juicios altamente laudatorios a la política económica gubernamental, nos mueve a reconocer que el citado comunicado fue posiblemente concertado entre el gobierno y los dirigentes empresariales firmantes.

Por ello, con el desplegado, el gobierno podía y puede sostener que sus adversarios son los grupos de presión o de poder, conforme el presidente Borja ya lo había venido haciendo al destacar que el principal mérito de las políticas económicas de su gobierno consiste en haber recuperado para el Estado, la conducción de la economía nacional anteriormente a cargo de los agentes económicos privados. Adicionalmente, en el mensaje presidencial del 10 de agosto, el doctor Borja sostuvo que “pretenden erigirse en jueces de la moral y de la eficiencia, (*quienes hundieron al país*) por (*su*) ineptitud, . . . la corrupción (*y*) . . . sus uñas retráctiles”.²

Pero el comunicado también era de beneficio de los empresarios quienes, gracias a él, podían y pueden sostener que uno es el gobierno, uno es el Estado en el cual ellos no tienen ingerencia y otros son los “sectores productivos” que dirigen y controlan. Así, pretenden aparecer como absolutamente ajenos al diseño y ejecución de la política económica gubernamental, así aspiran a liberarse de culpa, a tener las manos libres para seguir actuando en aras del “interés nacional”. De paso, al obrar así, los empresarios

² Los subrayados son míos.

presentan al Estado como el mecanismo neutro, imparcial, arbitral que necesita el desarrollo del Ecuador.

La realidad sin embargo es bastante diferente. La propia persistencia de la crisis y la más simple evaluación de la política económica ejecutada en el Ecuador para conjurarla, durante especialmente los últimos ocho años, ha permitido descubrir que el Estado y la empresa privada han actuado conjunta y muy estrechamente en la conducción de la economía nacional y que, a pesar de ello, lo que se ha hecho ha resultado totalmente insuficiente para afectar seriamente a la crisis que padece el país.

Abonan en favor de la hipótesis de la concertación gobierno-empresarios, las posteriores declaraciones de altos funcionarios, en el sentido de que "el gobierno desea responder con cautela y analizar seriamente el comunicado de los empresarios" (Washington Herrera, Secretario General de la Administración) o que "El comunicado ha sido bienvenido por el gobierno" (Gonzalo Ortiz, Secretario de Comunicación), o sendas opiniones de importantes órganos de difusión, en el sentido de que "Empresarios, trabajadores, marginales, el país entero tiene mucho que criticar al gobierno, a todo gobierno, pero será preciso que todos hagan un esfuerzo de ecuanimidad y objetividad para que el indispensable diálogo social sea posible" (Periódico *Hoy*, jueves 3 de agosto de 1989).

Con el mismo propósito ideológico antes señalado, actualmente se difunden constantes insinuaciones y juicios destinados a desacreditar a los países socialistas. Es que los enemigos y desafectos al socialismo no le dan tregua. Dedicán todas sus fuerzas y capacidades a destruirlo. Mediante la guerra propagandística, el despliegue de hechos que en cualquier otra circunstancia no merecerían tanta publicidad, se busca deformar y minar la confianza de la gente en el socialismo, así como mantener la ilusión de que dentro del capitalismo los problemas se irán gradualmente resolviendo.

Al sostener lo anterior, de ninguna manera buscamos ocultar problemas, graves errores, retrocesos que sin duda existen en los países socialistas. Quienes creemos y confiamos en el socialismo como organización superior al capitalismo para terminar con el hambre, las injusticias, las guerras, la alienación, la desigualdad de deberes y de derechos por razones del sexo, el desempleo, la inflación, no podemos ni debemos acostumbrarnos a solamente exaltar los progresos y a pasar por alto una serie de aspectos negativos

que sin duda existen en los países socialistas, ni tampoco a atribuirselos exclusivamente a la acción del imperialismo.

Todos podemos constatar hoy cómo, diariamente, se ejerce una presión propagandística inaudita, a través de publicitar y deformar hechos que los propios medios de difusión los califican como "proclamación de la independencia de Polonia frente a Moscú", "la transformación radical de la economía de Polonia a un sistema de economía de mercado del tipo occidental", "la era del post-comunismo", "el reformismo económico de Deng Xiaoping", "la reversibilidad del socialismo", "el éxodo masivo de refugiados estealemanes de Hungría hacia la República Federal Alemana", "el narcotráfico en las altas esferas del Estado cubano". Creemos que, particularmente en los primeros días de septiembre de 1989, sólo la difusión de la masiva peregrinación al Cajas, para esperar el contacto con la Virgen, a través de la joven de 17 años, Patricia Talbot, superó en publicidad a las versiones deformadoras, perjudiciales y agresivas frecuentemente contrarias al Socialismo. Este último acontecimiento mereció tanta publicidad, no obstante que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo conocer "que no es partidaria de la difusión que se está dando a los supuestos mensajes de la Virgen".

Pero volviendo al motivo central de nuestra preocupación, corresponde insistir en que la difusión no siempre objetiva y ajustada a la verdad de hechos que se viven en los países socialistas y que está dirigida básicamente a la juventud, lo que busca es desacreditar al socialismo y renovar esperanzas de que el capitalismo es mejor, con sus ingredientes de libertad, creatividad y eficiencia. En la propaganda antisocialista ya ni siquiera se repara en reconocer que los países que hoy construyen ese sistema, surgieron y se desarrollaron en condiciones muy duras, muchos de ellos emergieron de las ruinas, eran de las naciones más atrasadas del mundo, que hoy viven infiltradas y hostilizadas por el enemigo, que sufren agresiones diarias, que enfrentan provocaciones constantes, que padecen sabotajes, robos de cerebros, presiones de toda naturaleza.

El ataque al socialismo es coincidente con una serie de reformas planteadas por sus dirigentes, en diferentes países, para enfrentar fallas, errores y desviaciones que sin duda se cometieron.

Pero el ataque no solamente se dirige a los países socialistas sino a todos los pueblos revolucionarios y aún a los países que con-

forman el grupo de los No Alineados a quienes, por continuar en su lucha contra el imperialismo, se los acusa de haber perdido la brújula, de "anquilosarse en su visión del mundo", de mantener un discurso extemporáneo y disonante en años de deshielo, acercamiento, perestroika y fin de la guerra fría.

Los desafíos de los trabajadores y las organizaciones de masas

Pero frente a todo lo que digan o hagan las clases dominantes (íntima y subordinadamente ligadas al capital monopolista trasnacional) y el gobierno, la mayoría de la población nacional, la que de verdad se siente perjudicada por la crisis y la acción que desarrolla el Estado para conjurarla, no se mantendrá pasiva ni subordinada. Hoy mismo, si hay algo que caracteriza a la vida nacional, es el descontento del pueblo por la grave situación económica que soporta, por la inflación que crece, por la falta de empleo, los bajos salarios, por la mentira, las falsas promesas, la corrupción, los abusos por parte de quienes viven llenos de privilegios. Por todo esto, es factible anticipar que, en el futuro, las luchas de los trabajadores se intensificarán en todos los planos, incluyendo los ideológicos y que, las dirigencias laborales, los partidos políticos de izquierda, inclusive aquellos que han asumido posturas reformistas, se verán sometidos a duras pruebas. No deben descartarse, tampoco, la presencia de contradicciones al interior del propio gobierno.

Claro que el Estado, las clases dominantes nativas y el capital trasnacional persistirán en sus propósitos de afrontar las más agudas contradicciones de la crisis mediante infinidad de procedimientos entre los que no cabe desechar, inclusive, una cierta radicalidad del partido gobernante, la difusión de reformas ambiciosas y hasta la realización de medidas propias de la esfera de la distribución. A través de todas estas acciones y hasta el ataque a los "grupos de presión" que hacen política y que persiguen "derechizar" al gobierno, se buscará alimentar ilusiones, contrarrestar el escepticismo y desmovilizar a los trabajadores, hacerles creer que mediante reformas legales y administrativas se podrán resolver los más graves problemas del Ecuador.

Todo lo anterior destaca que la actual crisis y la perseverante acción ideológica de los grupos dominantes nativos y trasnacionales, plantean hoy un desafío inevitable para los trabajadores y la mayoría de la población afectada por ella. El grave problema es cómo modificar la actual correlación de fuerzas en beneficio precisamente de los trabajadores y de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas en el desarrollo y la transformación del país.

Esta apreciación adquiere mayor vigencia si se tiene en cuenta que 1990 será un año de gran efervescencia electoral y cuando, revisando los hechos desde una perspectiva histórica, se puede concluir que las contiendas electorales han desempeñado en el país una especie de descarga emocional, de diversionismo, de mecanismo destinado a renovar esperanzas y no precisamente ni siempre, de oportunidad para concentrar la atención ciudadana en aquello que verdaderamente importa.

Frente a problemas como los mencionados, frente especialmente a la densa campaña ideológica burguesa que se intensifica, a los investigadores ecuatorianos con conciencia social, a los universitarios, nos corresponde desempeñar una función esencial en el desentrañamiento de las raíces históricas de los actuales problemas nacionales. Nos corresponde contribuir y participar en el debate teórico e ideológico, entregarnos al encuentro de la verdad por vías verdaderamente científicas.

En cuanto a las campañas publicitarias que buscan desprestigiar al socialismo, los investigadores sociales tenemos la necesidad de estudiar con interés y acuciosidad, con profundidad, objetividad y equilibrio, los diferentes procesos de construcción del socialismo en todas partes del mundo. En este aspecto, debe destacarse que, sin chauvinismos, sin radicalismos formalistas ni verbales, sin sectarismos, inclusive, sin afanes ni por consignas partidistas, la universidad ecuatoriana en general tiene la responsabilidad científica de examinar y estudiar lo que actualmente ocurre en los países socialistas, pues nadie ni los más desafectos al socialismo, pueden ignorar una realidad insoslayable, la de que poco más de la tercera parte de la población mundial, se desenvuelve bajo el socialismo que, con problemas que también sería inútil ignorar y menos negar, constituye una realidad superior al capitalismo y ello, sin explotar ni oprimir a ningún pueblo del mundo.

En todo tiempo y lugar pero especialmente en la hora actual del país, los investigadores sociales no podemos rehuir el debate

ni pretender permanecer imparciales ni lejos de la contienda. El compromiso de los científicos sociales con el desarrollo de su pueblo, debe hacernos comprender que toda estrategia que persiga someternos a las exigencias de los grupos monopolistas nacionales y extranjeros o de aliarnos a éstos económica y políticamente, no es una estrategia capaz de impulsar ni fortalecer nuestra soberanía e independencia, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población nacional, reducir las desigualdades regionales o provinciales, ni poner límites a la dilapidación de la riqueza creada por lo trabajadores ecuatorianos.

Si somos capaces de acompañar a los propósitos de transformación que reclama el momento histórico del Ecuador, de lograr que estos propósitos sean más visibles y que maduren, más cerca estaremos de la mayor presea a la cual puede y debe aspirar un intelectual: el reconocimiento de su pueblo.